Henry Pease García
**Perú actual:
crisis política tras
una década militar**

INTRODUCCIÓN

Tanto la crisis económica que agobia a la sociedad peruana, como la protesta popular y sus recientes expresiones de fuerza, hacen necesaria una explicación de la profunda crisis política que atraviesa el gobierno de la Fuerza Armada, tras una década en la cúpula del poder del Estado, reflejo a su vez de la recomposición y el reacomodo de las clases dominantes y el poder imperialista. Analizar el proceso político de esta década es indispensable para comprender los límites y márgenes del gobierno encabezado por el general Morales Bermúdez en medio del rechazo popular de las mayorías nacionales.

En este trabajo procuramos presentar la coyuntura actual y sus perspectivas analizando el curso político de la Segunda Fase del gobierno de la Fuerza Armada y los términos de la salida política que propone a partir de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. La comprensión de este periodo — para el caso del público latinoamericano— obliga a referirnos introductoria y brevemente al conjunto de la década y a su ubicación histórica, señalando rasgos, logros y límites de la llamada Primera Fase que encabezó el general Velasco. Esta referencia necesaria al periodo 1968-1975 la hacemos en base a varios trabajos ya publicados,¹ mientras que el análisis de la Segunda Fase se hace a partir de un estudio aún a medio camino que realizamos en el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO).²

I. UBICACIÓN HISTÓRICA

1 Pease, Henry: "El ocaso del poder oligárquico: lucha política en la escena oficial 1968-1975", DESCO, Lima, 1977, y Pease, Henry: "La reforma agraria peruana en la crisis del Estado oligárquico" en *Estado y política agraria*, DESCO, Lima 1977.

2 El estudio se basa en algunas fuentes y materiales de los tomos IV y V de la *Cronología Política* publicada por DESCO (Henry Pease y Alfredo Filomeno: *Cronología Política*, DESCO, Lima, 1977) y en los materiales preparatorios del tomo VI.

La crisis de la dominación oligárquica, visible en la sociedad peruana durante la década del cincuenta tendrá rasgos cancelatorios a partir del movimiento militar del 3 de octubre de 1968, que encabeza el general Velasco. Un largo proceso social que se expresa en las movilizaciones campesinas, en las quiebras del orden rural tradicional, en el acelerado proceso de urbanización y en la modernización económica que torna preponderante al polo urbano industrial de la economía, está en la base de la crisis de hegemonía que se observa en el bloque en el poder. El gobierno del 68 implica un corte en el proceso histórico que cancela la vigencia de una forma de dominación. A partir de entonces las clases y fracciones conocidas como oligárquicas salen del bloque en el poder y pierden su base material, a la vez que se intenta una redefinición de las relaciones con el capital imperialista.

El general Velasco asume el poder tras una larga crisis política. El gobierno del presidente Belaúnde (1963-68) expresó la crisis de hegemonía presente en el seno de las clases dominantes. Belaúnde, al frente de la alianza de partidos acción popular-democracia cristiana, levantó las banderas reformistas que expresaban las demandas populares antioligárquicas —particularmente la reforma agraria—, sin concretar en realizaciones significativas su programa. Enfrentado a la coalición oligárquica que controlaba el parlamento,³ vio quebrarse y desmoronarse su propia base, popular y partidaria, a la vez que recibía el embate de un insurgente movimiento popular urbano y rural, este último dinamizado por las guerrillas de 1965. La crisis de este gobierno lleva al deterioro del sistema político y de sus endebles partidos,⁴ a la vez que obliga al recurso a la Fuerza Armada para reprimir y liquidar a las

3 Por alianza de los partidos aprista y odrilista. El primero había obtenido el 34.36% de los votos en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1963 y el segundo contaba con el 25.52%, lo que les permitió hacer mayoría en el Congreso y enfrentar al poder Ejecutivo aprovechando que la carta Constitucional de 1933 establece un híbrido de sistema presidencial y parlamentario, con efectivo poder en ambos.

4 Sólo el partido aprista tiene solidez organizativa y larga permanencia en la escena política peruana. Surgido en las primeras décadas del siglo, como principal cuestionador de la dominación oligárquica, creció y se disciplinó en medio de una drástica represión de treinta años. Pero ya en la década de los sesenta el Apra ha abandonado sus posturas antioligárquicas y el genérico antimperialismo de los años treinta. Aliado del pradismo entre 1956-62, se vinculó a la clase dominante en su versión más tradicional ofreciéndole una salida "democrática". En el periodo 63-68, aliado con Odría, su antiguo represor, expresa en la escena los intereses de la burguesía agroexportadora, aliada con los terratenientes más tradicionales vinculados al odrilismo. A éstos se ofrece como alternativa para lograr retener el poder en plena crisis, recubriéndose con careta democrática y populista. El Estado oligárquico se caracterizaba por la exclusión drástica de toda oposición real. Ello mismo, y su incapacidad para aglutinar grandes masas en un proyecto hegemónico, explican la ausencia de sólidas instituciones partidarias.

En la década de los sesenta hay diversos partidos, pero endebles, surgidos en torno a un líder o a un grupo de élite,

guerrillas con lo que se desarticula fácilmente el movimiento popular. En su deterioro intentará Belaúnde una conciliación que facilite la recomposición del bloque en el poder, sin lograrlo.⁵

En la escena política de entonces se expresa la pugna entre las fracciones oligárquicas de la clase dominante —agroexportadores, banca y comercio tradicional, terratenientes gamonales— y la burguesía industrial fuertemente ligada al capital foráneo. Esta pugna irresuelta se produce en medio de muy diversas presiones del capital imperialista norteamericano, presente en todas las esferas de la economía, con control monopólico sobre los recursos naturales (petróleo, minería) y compartiendo propiedad y poder significativo en la banca; la agricultura de exportación, la pesca y la industria, además de antiguas inversiones en la forma de "enclave" y la moderna presencia de transnacionales en la última década.

El deterioro del régimen de Belaúnde, y la pugna política de las clases dominantes que expresa, abrirán a la Fuerza Armada un importante margen de juego en el poder. La intervención militar —que surge en una coyuntura de descomposición que se expresa en el acta de Talara—⁶ podrá tener en la frustración de las banderas nacionalistas y antioligárquicas un contexto eficiente para la generación de nuevos consensos. Con Velasco, la Fuerza Armada abandona el papel de árbitro que tenía desde 1956 para tomar directamente el gobierno y a partir de él ampliar notoriamente su margen de poder. En una sociedad desarticulada, en la que fuera del ejército y la Iglesia pocas instituciones fueron estables y significativas —fuera del poder económico—, el nuevo gobierno ha de conseguir el poder suficiente para realizar los cambios políticos y socioeconómicos que los partidos reformistas ofrecieron, agotando y *superando* rápidamente las banderas que éstos desplegaron entonces.

II. TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO OLIGÁRQUICO

inestables, inorgánicos y a los m-s aluvionales.

5 En 1968, el gabinete Herculles —que tiene al empresario Manuel Ulloa (DELTEC-Rockefeller) como su ministro más notorio— intenta una recomposición del bloque dominante, en crisis por la pugna de agroexportadores e industriales modernos, pero su gestión queda cortada en sus inicios, por la intervención militar del 68.

6 El acta de Talara intenta solucionar un antiguo litigio entre el Estado y la International Petroleum Co. (Standard Oil-New Jersey) que llevó a un chantaje permanente de Estados Unidos hacia el régimen reformista de Belaúnde. Este acuerdo —tomado en agosto de 1968 y anulado el 9 de octubre por el nuevo gobierno— nacionaliza en la forma los antiguos pozos petroleros, dejando grandes concesiones a la International. La desaparición de la página 11 del Contrato —firmado entre presiones agobiantes— desata un escándalo político en medio del cual cae el régimen de Belaúnde, en total descomposición.

La cancelación de la dominación oligárquica es fruto de un conjunto de reformas que se emprenden a partir de este largo proceso político anterior. La reforma agraria expropia a la burguesía agroexportadora las tierras, plantas de transformación azucarera y el control del comercio de exportación. Se afecta definitivamente así a la fracción hegemónica de la clase dominante, en crisis desde años antes. La mayor parte de la banca pasa a control del Estado —cancelando la antigua fracción financiera—, a la vez que el terrateniente serrano⁷ desaparece de la escena. Junto con la caída de estas fracciones de la antigua "oligarquía", el gobierno intenta redefinir la presencia del capital imperialista expropiando los principales "enclaves" norteamericanos mineros y petroleros (IPC-Cerro de Pasco-Marcona), estatizando la pesca de anchoveta y los servicios públicos (teléfonos, luz eléctrica, ferrocarriles) y redefiniendo la legislación de modo tal que se asegure un mayor poder del Estado en las nuevas concesiones y en la industria básica, aun cuando en ellas el capital extranjero se presente asociado, ahora con el Estado.

La burguesía industrial resulta favorecida en función de estos cambios que eliminaron a la parte más tradicional de la clase dominante, con la cual pugnaba desde hacía largo tiempo.⁸ Es importante, sin embargo, el hecho de que la cancelación de esta dominación no fuera obra de sus representantes directos. En efecto, el gobierno de la Fuerza Armada no puede ser visto como una mera prolongación de la burguesía industrial. Ésta articuló sus intereses con parte del gobierno, pero sin lograr una representación orgánica. Más aún, los militares impusieron su propio proyecto político afectando, parcial pero significativamente, los intereses de la burguesía industrial y la concepción liberal de su proyecto político. La reserva para el Estado de la industria básica —incluida en la Ley de Industrias de 1970— y concretada en la expropiación de varias plantas industriales (cemento, papel), así como en la expansión de otras industrias estatales (siderúrgica, construcción naval); la generación de un decisivo sector empresarial del Estado (en la minería, la pesca de anchoveta y su transformación, la comercialización exterior e interior, la industria básica, los servicios públicos) y la imposición de la

7 Latifundista que opera a partir de relaciones precapitalistas, con efectivo poder regional aunque subordinado en el conjunto de clases dominantes.

8 Esta cancelación parece inevitable para que la burguesía industrial logre su plena expansión, ampliando el mercado interno e incentivando la industrialización sustitutiva. Aunque arrancó concesiones a las fracciones oligárquicas en los años anteriores, no lograba las condiciones necesarias para imponer su hegemonía en la cúpula y en el conjunto de la sociedad. Los partidos reformistas de la década de los sesenta —AP y DC— expresaron las demandas de amplios sectores medios y populares articulados parcialmente con esta burguesía industrial, que tiene con todo una actuación ambivalente. Sólo a fines del gobierno de Belaúnde se intenta un proyecto partidario más orgánico.

cogestión y copropiedad —Comunidad Laboral— en toda empresa industrial, minera o pesquera, fueron los ejes de la pugna que se desarrolló a partir de 1970 con la burguesía industrial.

El impulso de las reformas ha de cambiar radicalmente el poder del Estado en la economía. De ser un Estado débil, expandido sólo en servicios sociales, que hasta la década de los sesentas dependía del sector privado incluso para el cobro de impuestos —no había Banco de la Nación y el Banco de Reserva tenía mayoría privada en el directorio— se ha pasado a un Estado gestor y propietario, capaz de conducir el proceso económico mediante el control de sectores de importancia decisiva y con una legislación que le hace normar minuciosamente la acción del sector privado.⁹

Este poder económico concentrado en el Estado es la resultante más neta del proceso 68-75, que da vigencia y poder efectivo a una nueva tecnocracia civil y militar que se sobrepone a la burocracia estatal, manejando grandes empresas públicas y negociando directamente su asociación con el capital extranjero. Para la burguesía industrial —con sectores privados articulables significativos en la banca, la construcción, el comercio e incluso la actividad rural— el reto que representa el proyecto militar es decisivo. No se había caracterizado en el pasado por una amplia experiencia política, ni tampoco estaba libre del tradicionalismo retrasado propio del capitalismo nativo. Fuertemente vinculada al capital extranjero —que en el Perú provoca la industrialización sustitutiva desde la posguerra— verá como inadmisibles competidores al Estado. Aunque tenía antiguos vínculos gremiales —en la Sociedad Nacional de Industrias— no actuará en forma homogénea, siendo la gestión del corto plazo, la prebenda concreta, su campo de eficiencia. En la Primera Fase¹⁰ combinará enfrentamientos ruidosos con el gobierno, con articulaciones parciales de rodeo, en busca de representación, siendo posible la distinción de fracciones con distinto proyecto político en los momentos de máximo poder militar.

En el gobierno presidido por Velasco se recomponen las clases dominantes, quedando eliminadas las más tradicionales, redefiniéndose coyunturalmente las relaciones con el capital extranjero, enfrentando parcialmente a la burguesía industrial para tratar de "encajarla" en el proyecto militar y lo-

9 En 1974 el sector gobierno generó el 38% del Producto Nacional Bruto (PNB) y participó en el 51% de la inversión. Ese mismo año el gobierno controlaba el 78% del comercio exterior. Al respecto se puede consultar Boloña, Carlos: "Las importaciones del Estado. Aspectos teóricos y el caso peruano, 1971-76" *Apuntes*, n. 8, Universidad del Pacífico, p. 109.

10 Se conoce así al periodo de la década en que gobernó el presidente Velasco (1968-75), contrapuesto al de su sucesor el presidente Morales Bermúdez que se conoce como la Segunda Fase. El mismo presidente Morales Bermúdez introdujo la distinción.

grando —a partir del margen de juego inicial— una fuerte concentración de poder económico y político en el Estado. Este último hecho daría origen a una tecnocracia, actuante como "burguesía del Estado"¹¹ que está hoy presente imponiendo intereses propios a partir del manejo de la empresa pública, muy ligada y entremezclada con el aparato militar que ejerce directamente el gobierno.

Las clases populares tendrán en este proceso político ocasión de realizar cambios, concretar una amplia movilización, expresarse en organizaciones tanto propias como promovidas por el gobierno, y madurarán significativamente en la percepción del curso político. Los cambios operados no redefinen su condición básica de dominados pero posibilitan importantes hechos concretos de carácter material, en unos casos, organizativo e ideológico en otros. Hay aquí un proceso acumulativo de maduración, que parte de las décadas anteriores con sus avances y sus fracasos, que se expresará en una más decisiva presencia del movimiento popular —sindicatos y organizaciones campesinas— en la escena política. La presencia popular que en el último año se ha expresado más orgánica, es un cambio cualitativo que muestra el contraste de hoy con la sociedad oligárquica del pasado, en la que las masas eran más fácilmente excluidas de la vida política.

La reforma agraria tiene un papel importante en la incorporación del campesinado y del trabajador rural a la escena política. Fue bandera capaz de movilizar a amplias masas campesinas, y desde fines de la década del cincuenta estuvo en el ideario de todos los partidos —incluso los menos reformistas—, aunque con distintos contenidos. El régimen de Velasco la aplica en una versión avanzada que supera todos los proyectos de reforma anteriores. Logra adjudicar más de 7.3 millones de hectáreas, dando prioridad a las formas asociativas, que entregan la tierra a grupos campesinos en forma no individual.¹² Las cooperativas se extienden en la costa —el campo más moderno— afectando incluso a la burguesía propietaria de fundos medianos. En la sierra —que en su mayor parte produce bajo formas arcaicas y básicamente para subsistencia— la reforma agraria logrará menores avances, incapaz de incorporar plenamente al mercado a estas vastas regiones. Logrará expropiar el latifundio sin reordenar el minifundio y sin transformar la producción y comercialización agropecuaria de un país cuyo sector

11 Entendiendo la ambigüedad conceptual que implica, queremos señalar con este término el desarrollo de intereses propios y la articulación de grupos de interés a partir del poder de estas empresas estatales en manos de militares retirados y/o tecnócratas.

12 Entre 1969 y 1975 se expropiaron más de 5 700 fundos de más de 6.2 millones de has. En el mismo periodo se adjudicaron más de 5.2 millones de has a 221 000 familias, creándose cerca de cien empresas campesinas. Hasta julio de 1977, ya en la Segunda Fase, 3 millones de has más, correspondiente a 10 000 fundos adicionales, fueron expropiadas. En esa misma fecha se adjudicaron 2 millones de has adicionales a 92 000 familias adjudicatarias.

rural sufre un progresivo deterioro desde hace más de una década.¹³ En el Perú, una de las reformas agrarias más audaces del continente se aplica a la vez que la política económica global del mismo gobierno pauperiza significativamente al sector rural. Éstas y otras contradicciones del régimen limitarán los resultados de la reforma agraria, que logra adjudicar la tierra a sólo el 38% de las familias ocupadas en la actividad agropecuaria.¹⁴

Una de las características más importantes de esta reforma agraria será el fuerte poder de los aparatos de Estado en el campo, no sólo en la ejecución de la reforma sino en la operación concreta de las nuevas empresas campesinas, elemento decisivo cuando el curso político del gobierno se torna cada vez más antipopular. Todos estos límites, condicionantes de la situación actual del campesinado y el trabajador rural, no niegan sin embargo el papel dinamizador de esta reforma —a partir de ella y de sus frustraciones—; por ello la política peruana actual no puede ignorar, como en el pasado, al movimiento campesino.

El movimiento obrero tiene también en la década un notable impulso que hace madurar sus organizaciones y solidifica la conciencia política del proletariado industrial, minero y pesquero. El reconocimiento oficial de la CGTP —en 1971—marca no sólo un acto formal sino la posibilidad de expansión de esta central controlada por el partido comunista, que existía extraoficialmente desde años antes, cuando sólo la central aprista —en declinación— era reconocida. Dos centrales más —una democristiana y otra promovida por el gobierno—alcanzarán reconocimiento oficial a la vez que en la propia CGTP y fuera de ella, otras agrupaciones de izquierda disputan al partido comunista la hegemonía en el movimiento obrero. En la Primera Fase del gobierno se amplía la cobertura, organización e integración regional y por ramas de los sindicatos obreros.¹⁵ Este proceso se profundiza en conciencia política con la reforma de la empresa privada que emprende el gobierno en 1970 al crear la Comunidad Laboral —que propicia el acceso a la propiedad y gestión, hasta el 50% de la empresa, por los trabajadores agrupados en la comunidad industrial, minera o pesquera—, medida que da inicio a una amplia y desigual lucha política con la burguesía industrial, decidida a impedir la concreción de

13 En 1960 el agro aportaba el 19% del PBI, mientras que en 1976 aportó el 13%.

14 Véase Caballero, José María, "Sobre el carácter de la reforma agraria peruana" en *Latin American Perspectives*, vol. IV, n. 3, p. 146.

15 Entre 1956 y 1961 se reconocieron 396 asociaciones sindicales, cifra que se amplía en los gobiernos del periodo 1962-68 alcanzando reconocimiento oficial 1248, Entre 1968 y 1975 esta cifra se amplía aún más, reconociéndose 1987 asociaciones sindicales. Sólo en 1972 se reconocieron 410 de éstas. Ver: Suhmont, Denis: "*Historia del movimiento obrero peruano 1890-1977*", TAREA, 1977, pp. 316-17.

esta reforma.

El proyecto de generar un sector de empresas de propiedad social —autogestionarias con integración económica sectorial—, definido por el gobierno como llamado a ser hegemónico sobre el sector privado y el estatal, tendrá también un elemento dinamizador ideológico, aunque su aplicación resultara frenada casi en sus inicios. La reforma educativa y la expropiación de los diarios de circulación nacional —previamente de las empresas de televisión y parte de la radio— tendrán impacto en la lucha política del movimiento popular aunque su desarrollo resultó rápidamente detenido por el propio gobierno, que retuvo su monopolio. Los diarios —decisivos creadores de opinión en manos de la derecha más tradicional— fueron centro de la lucha de tendencias internas del gobierno en el primer año de su expropiación. Con todas las limitaciones de esta reforma un hecho resultó notorio en el primer año: los obreros y campesinos, siempre excluidos de los órganos de prensa —tanto para expresarse como para ser sujetos de la información—, tuvieron acceso parcial a las noticias periódicas bajo la producción gubernativa.

En la resultante de la Primera Fase este conjunto de reformas significó un vuelco del espectro político peruano, férreamente conservador durante la dominación oligárquica. La política tercermundista y la apertura de relaciones diplomáticas con los países socialistas, así como los diversos conflictos con Estados Unidos —en torno a la política exterior, las nacionalizaciones y los intentos de diversificar la dependencia tecnológica y militar en materia de defensa nacional—, constituyeron también ingredientes centrales de un curso político que contribuyó a dinamizar al movimiento popular. La propia formulación ideológica del gobierno, su "recusación del capitalismo" y la aguda pugna con los sectores tradicionales, señalaron el encuadre de una dinámica de transformación, conducida con mano férrea, que trastocaba el "orden establecido" y favorecía las perspectivas revolucionarias de distinto signo presentes en la escena política.

III. ¿REFORMA O REVOLUCIÓN?

Las transformaciones emprendidas en un corto periodo —que en este trabajo sólo hemos recordado, sin pretensión de evaluar— constituyen una sustancial alteración del curso político peruano, rígidamente conservador en el pasado y sometido a regímenes políticos que excluyeron con rigor la acción del movimiento popular, incluso cuando era meramente reformista. La alternativa reforma o revolución pasa a ser eje definitorio del lenguaje político corriente, que antes excluía del léxico y de la escena política todo cambio sustancial del orden oligárquico a pesar de una crisis que ya tenía décadas

de vigencia. El régimen militar se autodefinió revolucionario, aunque es evidente que no estaba el pueblo en el poder y que el sistema capitalista era amenazado potencialmente por el curso político pero no cuestionado en sí por sus reformas. Es importante por ello referirse a la composición y los límites del régimen.

Lo original en el caso peruano estaba en que un gobierno de la Fuerza Armada emprendiera este conjunto de reformas y optara por ellas. El gobierno, en efecto, no era expresión orgánica de las clases dominantes. La pugna por la hegemonía entre éstas, y el desgaste político del periodo anterior, dieron un margen amplio a la Fuerza Armada para asumir el gobierno y actuar imponiendo condiciones significativa: a la clase dominante y al capital extranjero. A partir de él se ensanchó el poder económico del Estado, reforzando el poder de la Fuerza Armada que lo controlaba. El gobierno hizo uso del efecto sorpresivo de su propia actuación y la clase dominante demoró un largo periodo en recomponerse y pasar a la ofensiva.

El gobierno asumió desde el inicio una posición nacionalista y antioligárquica, logrando depurar de su seno a los militares más dispuestos a conciliar con la oligarquía. A partir de sus logros iniciales se observará la radicalización de una parte de los militares en el poder, que con Velasco a la cabeza pugnarán en la cúpula con aquellas tendencias que en su propio seno aceptaban conciliar fácilmente con la burguesía liberal. La lucha política atraviesa al gobierno en toda la Primera Fase y ello se expresa no sólo en acciones contradictorias sino en coyunturas sucesivas de enfrentamientos en el gobierno, que provocan varios desplazamientos.

Aunque el general Velasco retiene —dentro de su conducción pendular— la dirección que marca el rumbo del proceso avanzando una a una las reformas, estos rasgos de la lucha de tendencias marcarán el proceso político. La burguesía intentará sucesivos rodeos obteniendo importantes concesiones en los primeros años —aunque sus representantes militares más significativos en la cúpula no alcanzan hegemonía e incluso son derrotados por momentos—, esperando pacientemente la ocasión para retomar la ofensiva. Esto sucederá al final de la Primera Fase, cuando el régimen comienza su deterioro interno, al agudizarse la lucha política en la cúpula y en la Fuerza Armada con la presencia en el poder de una alternativa autoritaria, calificada por muchos de profascista,¹⁶ que intenta encuadrar la movilización popular y establecer una asociación más orgánica con el capital extranjero, desde el Estado.

Para entonces el curso de la lucha política ha ido depurando en la cúpula del gobierno —no así en la

¹⁶ Somos conscientes de que el término en este caso es inadecuado, aunque expresa la forma en que fue visto en la escena, en tanto tenía rasgos que a una observación inicial recordaban formas fascistas de poder.

Fuerza Armada— a los ministros conservadores de línea más tradicional y antiestatista, a la vez que en la propia tendencia que encabeza Velasco se van radicalizando algunas posiciones, se formulan proyectos políticos que reclaman una inspiración socialista y propugnan la hegemonía de la propiedad social, forma de empresa autogestionaria promovida desde el Estado a partir de 1974. En el campo popular se observará entonces cómo, a partir de las reformas y más allá de éstas, las organizaciones populares tienen su propia dinámica y avanzan en sus niveles de presión y demanda exigiendo del gobierno definiciones más claras, no sólo en la utopía sino en las condiciones económicas concretas, que empiezan a deteriorarse. Se enfrenta así el gobierno a uno de sus problemas irresueltos desde 1968: la relación con el movimiento popular, el límite que impone con su propia visión burocrática del proceso de cambios sociales en que está inmerso y cuya resolución toca estructuras ideológicas fundamentales en la Fuerza Armada. "La Misión"¹⁷ articulará con eficiencia sus posiciones en el gobierno y la Fuerza Armada para concretar su proyecto burocrático y vertical de encuadre del movimiento popular, a la vez que traza eficientes vinculaciones con aquellos sectores industriales más dispuestos a aceptar la asociación con un Estado económicamente fuerte, pero que no cuestiona su criterio de rentabilidad.

Los últimos dos años del gobierno que encabeza Velasco estarán marcados por la agudización de la lucha política en la cúpula y en la base, aislando al régimen y subrayando su incapacidad para articular una base social y política amplia. "La Misión" utilizará en sus operativos el profundo anticomunismo que es propio de la formación militar, a fin de satanizar competidores y desplazar todo tipo de dirigencias no disciplinadas; frenará los tibios intentos de los militares progresistas para ampliar la vinculación con el movimiento popular, y cuando ya esto es imposible encuadrará sus acciones dentro de los estrechos límites burocráticos. La formación de la CTRP,¹⁸ la quiebra de CONACI,¹⁹ la

17 Se calificó así a un grupo de ministros que articulaban una línea particularmente vertical y burocrática en relación al movimiento popular, organizando nuevos entes sindicales, conduciendo operativos articulados con los servicios de inteligencia castrenses y logrando hegemonizar el rumbo político de los dos últimos años de Velasco. Puede ampliarse en H. Pease, "El ocaso del poder oligárquico", DESCO, Lima, 1977, pp. 147-81.

18 Central de Trabajadores de la Revolución Peruana creada por el gobierno e iniciada a partir de 1972. En sus inicios mismos —que incluyen una ruptura con el equipo del SINAMOS de entonces— se da el embrión de la futura "Misión". Se desintegra a fines de la Primera Fase, teniendo origen en la Segunda la CTRP - Lima, que evoluciona hacia una activa relación con el resto del movimiento popular.

19 Confederación Nacional de Comunidades Industriales (CONACI) creada por el conjunto de comunidades con apoyo del gobierno y desarticulada por "La Misión", cuando era evidente que no podía controlarla plenamente.

formación del SERP, la misma formación de la CNA —en la que sin embargo tienen menos éxito—,²⁰ pero sobre todo la acción del Movimiento Laboral Revolucionario (MLR), organización profascista no oficial, pero con apoyo de más de un ministro, serán signos de una ofensiva que desde fines de 1972 está presente en el gobierno, plasmándose en la clara hegemonía que "La Misión" tiene en éste durante 1974 y 1975. Entonces los militares progresistas, que se van distanciando del presidente Velasco, se verán progresivamente arrinconados, mientras la lucha política se expresa ya abiertamente en la prensa oficial.

El proyecto militar entra en crisis sin lograr una base propia de sustento ni articular alianzas estables con fuerza política alguna. La definición institucional del régimen —gobierno de la Fuerza Armada— se convierte en barrera para todo vínculo político estable, a la vez que la pugna excede las posibilidades del marco castrense. Velasco —deteriorado y a la vez aislado por su propia enfermedad— se acerca a "La Misión", que le ofrece un proyecto realista y conservador del esquema político. Sin embargo, las resistencias generadas por esta dirección autoritaria agudizarán la lucha interna en la propia cúpula de la Fuerza Armada y apurarán la caída del presidente y el surgimiento de posiciones institucionalistas que encabeza el general Morales Bermúdez. En estos militares llamados institucionalistas se hace presente un abanico de posiciones conformistas que, junto con demandas propiamente castrenses, califican toda alternativa popular como comunista y subversiva. En la coyuntura de 1975 —al caer Velasco— pesará también un conjunto de factores geopolíticos y militares vinculados directamente a la política norteamericana. El apoyo político y militar a la dictadura de Pinochet, en momentos en que Chile tensa sus relaciones con el Perú; el aislamiento diplomático en un continente plagado de dictaduras de derecha; la negativa a vender armas —que se facilitaban a Chile— a la vez que se orquestaba una campaña internacional de prensa, denunciando las intenciones bélicas del "régimen comunista de Velasco" —dadas las compras militares en la Unión Soviética— constituyen un contexto que preocupa gravemente a la Fuerza Armada y contribuye a la desestabilización del gobierno de Velasco.

El desplazamiento del presidente en 1975 margina coyunturalmente a "La Misión", desgastada en la lucha reciente, sin eliminar de la Fuerza Armada a todos sus cuadros. Eleva al sector institucionalista,

²⁰ Confederación Nacional Agraria creada por el gobierno a partir de la reforma agraria y disuelta hace pocos días cuando, ligada al Movimiento Popular, constituía uno de los baluartes de oposición al gobierno actual. En esta organización "La Misión" tuvo menos éxito en sus operativos por la presencia de la tendencia alternativa del propio gobierno, aunque la legislación y parte de la gestión estuvieran limitadas por el encuadre global del gobierno.

el cual carece de tendencia definida y refleja aspiraciones dispersas de una cúpula castrense ansiosa de poder y a la vez consciente del desgaste en el plano internacional. Los militares progresistas acompañarán al golpe en un segundo plano y con muy pocas posibilidades de liderar la Segunda Fase. La crisis económica, que es ya inocultable en 1975, forzará a nuevas definiciones. Es en la conducción económica donde desde años antes se aprecia el punto límite de las reformas; ha quedado demostrado reiteradas veces que del rumbo antioligárquico a la recusación del capitalismo hay más de un paso... Encubierta por una aguda lucha política, la alternativa entre reforma o revolución está presente en la escena resaltando la incapacidad del régimen para dar un salto cualitativo. La resistencia a toda apertura hacia el movimiento popular ha de demostrar las raíces de la inviabilidad de la "revolución desde arriba".

IV. EL TALÓN DE AQUILES: LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LA DÉCADA

Las reformas emprendidas en la propiedad de la tierra, la banca y la industria, así como la estatización de gran parte de los recursos naturales, implicaban necesariamente un re-planteamiento de la política económica. El fortalecimiento del Estado, como gestor y empresario, no cuestionó los términos mismos de la economía capitalista ni replanteó su lógica de acumulación. La década se inicia con una crisis económica presente desde el gobierno de Belaúnde, explicable en el nivel estructural por las demandas de una industria dependiente que afectan la balanza comercial, a la vez que otros factores —fiscales y políticos— llevaban al entrapamiento final del reformismo democrático. En la política del nuevo gobierno se concluirá una renegociación de la deuda externa que, siguiendo los patrones tradicionales, posterga para 1975 el impacto de la deuda a la vez que obtiene —tras un periodo de chantaje imperialista—²¹ grandes préstamos internacionales.

Bajo la conducción del entonces ministro Morales Bermúdez —calificado de ortodoxo monetarista

21 A partir de la nacionalización de la IPC —anulando el Acta de Talara— se produce un enfrentamiento con Estados Unidos, que amenaza con aplicar la enmienda Hickenlooper y luego la enmienda Pelli —ante la defensa de la tesis de las 200 millas— marcando los años 1968 y 1969 con un alto nivel de tensión, que llega al punto máximo cuando Velasco ordena el retiro de las misiones militares norteamericanas. En el periodo se da una virtual suspensión de créditos a pesar de que formalmente no se aplican las enmiendas. El gobierno "dialoga" pero no negocia en el asunto de la IPC, que en el cuadro político de entonces le sirve de impulso inicial para el conjunto de reformas. Negociaciones posteriores, encuadradas en una política exterior abierta y en ofensiva, flexibilizan las restricciones iniciales y el crédito internacional fluye, logrando un importante nivel en el primer semestre de 1974.

desde el inicio de su gestión— el gobierno iniciará grandes inversiones públicas financiadas con los créditos obtenidos, destinándolas a proyectos tradicionales a largo plazo.²² A la vez se intenta con la inversión y el gasto público compensar la retracción privada y consolidar el sector empresarial del Estado. El modelo de industrialización sustitutiva que expresa la Ley de Industrias de 1970, tendrá innovaciones respecto del papel conductor del Estado y de los límites de la inversión extranjera, pero sin abandonar el patrón tradicional de una industria dependiente y asociada a los grandes monopolios. La estructura productiva de la economía peruana quedará intacta, descansando en los tradicionales productos de exportación —ahora con fuerte control del Estado— e incentivando una industria de bienes dirigidos a sectores de altos ingresos y a la exportación vinculada al Grupo Andino. El incentivo de esta industria —a la vez que se garantizan altas condiciones de rentabilidad— afectará sustantivamente las posibilidades del agro, pauperizado con un control de precios que se suma a las condiciones perennes de atraso, carencia de crédito y sistemas succionadores de comercialización.

Ninguna de las reformas aseguraba en sí condiciones estructurales nuevas de efectiva autonomía en el proceso productivo y menos aún la orientación de éste en función de las necesidades populares, tan lejanas a lo ofrecido por la industria y tan escasamente satisfechas por la producción agropecuaria. El dinamismo generado por el gasto público y por los grandes proyectos era evidentemente un efecto coyuntural que haría crisis por su propia lógica y que se agudizaría al variar las condiciones del sector externo. El Estado a su vez, al conciliar con las demandas concretas de la burguesía, carecerá de recursos para mantener su propio ritmo de inversión, pues otorga tales exoneraciones tributarias que la presión tributaria será decreciente en la década.²³

22 El inicio de grandes proyectos de irrigación de tierras costeñas, así como de proyectos mineros y petroleros, incluyendo la expansión de la industria básica, se haré básicamente con financiamiento exterior. La crítica actual recuerda las ataduras del crédito internacional, cuestiona la prioridad de algunos proyectos —las irrigaciones gigantes en vez de capitalizar los sectores rurales tradicionales con proyectos más modestos pero de mayor impacto—, la concentración de deuda a mediano plazo con obras que rendirán sólo en el largo plazo y el esfuerzo global de inversión pública sólo a partir del endeudamiento externo.

23 La presión tributaria ha disminuido en los últimos años. Ésta mide la relación de los ingresos tributarios del gobierno con relación al Producto Bruto Interno (PBI). Así, en el año 1968, esta relación era de 14.4%, mientras que en 1976 bajó a 13% y, según la reciente exposición del Ministro de Economía y Finanzas, se habrá reducido aún más en 1977. En lo que se refiere a la pérdida de ingresos fiscales por exoneraciones tributarias en la industria, éstas incrementaron de un 28.8% en 1969 hasta el 55.1% en el año 1972. En términos absolutos ello significa, para este último año, que de 2 861.7 millones de soles que se debieron pagar al Estado, hubo un pago efectivo de 1 285.6 millones de soles. Las pérdidas fiscales de un año (1972) equivalen a: 1.3 veces el capital pagado del Banco

La crisis económica se hace visible en 1974 —agregándose factores imprevistos de la producción para exportación— sin que el gobierno corrija entonces su política y cuando la presión de los gastos de defensa comienza a ser importante en un régimen incapaz de frenarlos por motivos internos y externos. Ya en 1974 y 1975 la inflación empieza a reducir el salario real de los trabajadores empleados, que había venido subiendo lentamente hasta 1973. Ese hecho se reflejará de inmediato en la protesta sindical, que "La Misión" intenta encuadrar represivamente. Es evidente también, en la misma Primera Fase, que el deterioro de la producción y las condiciones de vida del campo superan todo margen de error adjudicable a la reforma agraria y se vinculan a una política económica que es opresiva para el sector rural. Sobrepasando sus posibilidades reales, el gobierno ve cada vez más difícil la obtención de nuevos créditos internacionales, a la vez que los pagos mayores de la deuda externa comienzan a acercarse. La política inicial cerrará los ojos y ocultará la crisis económica —en el deterioro del régimen de Velasco—, a la vez que demanda un "aumento de la producción" y procura detener la demanda de aumentos salariales. La coyuntura económica y política muestra así en la propia Primera Fase el estrangulamiento de las reformas emprendidas, que dejan de ser prioritarias para parte del gobierno ante la crisis. Con todo, no hay en la Primera Fase decisión para emprender el viraje que demandan los empresarios y el propio capital internacional, que en un informe del Banco Mundial traza en 1975 las grandes líneas de la política de estabilización, centrada en dar mejores condiciones de rentabilidad al sector privado.²⁴ La magnitud de la decisión exige la caída de Velasco y, aún más, un cambio en la correlación militar de fuerzas que sólo se logrará en la Segunda Fase, con un proceso gradual que analizaremos.

La economía peruana ha continuado en la década su tendencia a la modernización capitalista,

Industrial, 4 veces el aporte del Estado a este Banco en 1973, 1.2 veces el total de préstamos aprobados y 1.8 veces el total de préstamos desembolsados. Como dice el informe elaborado por el MEF en 1975, "se podría dar a esa pérdida fiscal un uso alternativo para el desarrollo industrial, a través del financiamiento de la inversión pública o de apoyo a la banca de fomento". (Véase *Diagnóstico de la aplicación del Decreto Ley 18350* - Documento de Trabajo; DGI-OSP-MIT; pp. 54-55).

24 En su informe de marzo de 1975, el Banco Mundial hacía tres recomendaciones básicas: aumentar el precio de la gasolina, revisar la política de subsidios a los alimentos de consumo popular e incrementar las tasas de interés bancario con la finalidad de promover el ahorro y la inversión. Recomendaba también una política de flexibilización respecto al capital extranjero, especialmente en el petróleo y la minería, con la finalidad de aumentar las exportaciones de estos productos. Planteaba también que se fomentaran las exportaciones no tradicionales. Al respecto véase *Informe del Banco Mundial - Perú: desarrollos recientes*, marzo de 1976, edición mimeográfica.

cancelando las estructuras políticas que frenaban a los sectores más modernos. El proceso político alteró a tal punto la conformación del poder que supuso cambios importantes en la propiedad agrícola —transferida en parte al campesinado pero con control definitorio del Estado— así como en el papel en la economía del Estado, ahora propietario de importantes recursos naturales, de gran parte de la banca, de parte importante de la industria básica y reforzado en su control normativo y operativo del comercio externo e interno. Nada de ello cuestiona en sí —a pesar de las formulaciones ideológicas del régimen— al capitalismo como sistema ni el carácter del Estado peruano, que lo impulsa y contribuye a su reproducción. La situación de dependencia de la economía peruana permanece a su vez intacta en lo estructural, aunque esta década haya supuesto cambios y redefiniciones importantes. Esto se logró en base a una coyuntura nacional e internacional favorable, con no poca audacia y coraje encarnados en el presidente Velasco, pero no fueron conquistas irreversibles. La expropiación de grandes enclaves mineros petroleros, la redefinición de la política minera y petrolera —pasando de las grandes concesiones tipo "enclave" al contrato con el Estado que retiene refinación y fases importantes del proceso económico—, la estatización de servicios públicos fundamentales (luz, teléfonos, ferrocarriles, etcétera), la expropiación de tierras y plantas de transformación, constituyen hechos en sí importantes. Lo son también las adquisiciones o expropiaciones de grandes bancos y de parte de la industria básica. Todo ello corresponde a una política nacionalista que no por ello niega un lugar particularmente rentable al capital extranjero, el cual se asocia directamente con ella en industrias básicas, incentiva su participación en la industria privada, promueve una industria nacional en el nombre pero dependiente en la estructura, y año a año exporta ingentes capitales al exterior por utilidades de patentes y otras vías menos legales.²⁵ El reacomodo, aunque haya ahuyentado algún tiempo la inversión extranjera,²⁶ lleva

25 Entre 1966 y 1974 la entrada neta de capitales por inversión directa norteamericana fue de 323 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo salieron 743 millones. Salieron, pues, 425 millones de dólares más de los que entraron. Si a lo anterior se suma el saldo de endeudamiento externo con respecto a las amortizaciones e intereses, nos da un total de 1 084.5 millones de dólares que salieron de nuestra economía por encima de los dólares que entraron. Las "rentas de inversiones" públicas y privadas se han incrementado en los últimos años, pasando de 181 millones de dólares en 1973 a 504 millones en 1978. Como se sabe, este rubro en la balanza de pagos hace referencia a los intereses de la deuda pública externa y a utilidades, intereses y royalties de la inversión directa extranjera. El incremento de este rubro es importantísimo: en 1973 representaba el 58% de la balanza de servicios, mientras que en 1978 representar el 95% de la misma, (Véase Otero, Carlos y Cabieses, Hugo, *Economía peruana: un ensayo de interpretación*. DESCO, 1977: p. 27.)

26 Mientras que la entrada de capitales por inversión directa norteamericana fue de 40 millones en 1966, en 1967 fue de 57 millones, a partir de 1968 comenzó a disminuir llegando incluso a cifras negativas en 1970 y 1971, para recuperarse recién en 1972. (Al respecto véase Ibid., loc. cit.)

en su misma raíz una lógica que le ofrecerá luego —ya hay más que signos— ocasión de enormes ventajas tanto en el campo industrial como en el primario exportador.

La perspectiva del proceso político de esta década, vista así, es muy distinta de la imagen dada por la ideología del gobierno. En el antimperialismo, en la recusación del capitalismo como vía de desarrollo, en el intento de construir un modelo alternativo —de inspiración socialista—, tan sólo se reflejan los sucesivos proyectos políticos que pugnaron en el gobierno por la hegemonía. Ello sin embargo no niega significación a este proceso político que habrá influido decisivamente en la historia peruana. Expresa más bien lecciones de una realidad dura de transformar y límites del proyecto mismo, hecho al margen del pueblo y dictado como acto de poder a partir de una coyuntura en la que hizo crisis el poder tradicional.

V. SEGUNDA FASE: ¡MEDIA VUELTA ... DERECHA!

Esta conocida voz de orden, tan usada en medios castrenses, se expresa en el curso político del gobierno de la Fuerza Armada durante la llamada Segunda Fase del Proceso Revolucionario. Se trata de un curso gradual que conduce el presidente Morales Bermúdez, en medio de una casi permanente crisis política y económica nacional, que sirve de manto encubridor del desmantelamiento del proyecto velasquista.

Al derrocar al presidente Velasco el 29 de agosto de 1975, la Fuerza Armada reafirma la continuidad de su proyecto político y el general Morales Bermúdez se encarga de insistir en la decisión de profundizar los cambios operados. El mismo discurso político es alterado formulando como "socialismo peruano" el proyecto del gobierno²⁷ y enderezando medulares críticas al sector industrial y a la política seguida frente a éste.²⁸ La presencia en el gabinete y en el comando del ejército de los más

27 Durante el gobierno de Velasco la ideología oficial enuncia primero una oposición equidistante del capitalismo y del comunismo para luego formular la "recusación" del capitalismo y —a la vez que niega ser una formulación tercerista— enunciar su proyecto como "democracia social de participación plena", inspirada en las corrientes de pensamiento humanistas, socialistas, libertarias y cristianas. El general Morales Bermúdez enuncia al comenzar la Segunda Fase un "socialismo peruano" como proyecto ideológico, aunque luego dejar de usar esta noción por considerar que es creadora de confusión.

28 En una de las pocas ocasiones que parecieron indicar un replanteamiento de la política económica de la Primera Fase, el presidente Morales Bermúdez ante una reunión de empresarios (CADE 75), recogió gran parte de la crítica que ya entonces se hacía al modelo industrialista dependiente en aplicación.

connotados militares progresistas de la Primera Fase, así como el rápido desmantelamiento de la maquinaria montada por "La Misión", parecían confirmar este rubro político. Analizando las medidas de los primeros meses del nuevo gobierno, se encontrarán en este rumbo algunos pasos referentes a la priorización del sector de propiedad social —cuyo jefe se integra al gabinete— o a la reducción del límite de inafectabilidad a cincuenta has en la costa, para acelerar la reforma agraria más allá de la mediana propiedad rural. Pero los hechos de la política económica indicarán el mismo curso político antipopular del último tiempo de la Primera Fase... con el añadido de "llover sobre mojado" —en la economía popular— y enfrentar una coyuntura financiera cada vez más difícil. Las críticas del discurso político y los enunciados de profundización no se concretarán en medida económica alguna que indique un cambio de rumbo. La presión progresista sólo parece expresarse en el mantenimiento de subsidios a algunos productos de consumo popular, en lógica necesariamente descendente: se encarecen los precios, aunque a menor ritmo que el demandado por el Fondo Monetario Internacional. Este organismo ha de ser el interlocutor fundamental —aunque primero se procure negociar directamente con los bancos— y la resultante es conocida ampliamente en América Latina: se reduce el salario real, hay más desempleo y subempleo... mientras que los impuestos a las empresas no aumentan, ni los gastos del Estado y la defensa decrecen.

A pesar de su dificultad para concretarse en medidas, el discurso político progresista sirve para cubrir el gradualismo del viraje político, que se expresa en la ofensiva de la derecha y en la depuración, uno a uno, de los militares progresistas. Al cumplirse el primer aniversario de la Segunda Fase, el presidente Morales Bermúdez podrá exhibir en su haber varios galardones gratos a la derecha: no queda en el gobierno un militar progresista con papel significativo; tampoco ocupando mando militar alguno; el país se gobierna con un largo estado de emergencia que afecta represivamente a la izquierda y a todo el movimiento popular, al que ahora se aplica la pregonada "disciplina laboral". En un primer momento —hasta el conocido mensaje del 31 de marzo de 1976— el escenario político se apreciaba contradictorio; pero había algún margen de credibilidad en el progresismo del gobierno. Su imagen se veía deteriorada por la ofensiva política de la burguesía —y la antigua derecha política que, al amparo de las medidas tomadas para democratizar el asfixiante clima político de agosto de 1975, lograba arrinconar y debilitar al gobierno actuando decisivamente en presión de los altos mandos de la Fuerza Armada.

En efecto, la burguesía desata una importante ofensiva a través de la acción empresarial y de las revistas reabiertas en la Segunda Fase. Los empresarios llevaron a cabo una ofensiva antilaboral en

regla, iniciada de hecho en articulación con "La Misión" en 1974-75, que aprovecha la impermeabilidad militar al diálogo sindical y demanda disciplina. Sus banderas son desde entonces la derogación de la Ley de Estabilidad Laboral,²⁹ la modificación de la Comunidad Laboral y el arrinconamiento del proyecto de Propiedad Social, al cual acusan de "competencia desleal" a pesar de su escasa dimensión operativa. Acciones dirigidas a propiciar conflictos sindicales se combinan con una propaganda que acusa a toda huelga de "causante" de la crisis económica y reflejo de la indisciplina laboral, que atenta contra el "aumento de la producción". Se califica de comunista toda acción popular, levantando este mito para anatemizar ante la Fuerza Armada y los grupos medios la protesta del movimiento popular ante la reducción del salario real. Todo el esfuerzo de las revistas conservadoras se articula con la acción empresarial, que incluye despidos masivos y más de un conflicto artificialmente inflado. Esta ofensiva tiene como base real la protesta general de un movimiento popular mucho más orgánico que antes, consciente de los efectos concretos de la política económica.

La ofensiva de la derecha había orquestado el ataque a todo militar o funcionario civil progresista, llegando a cuestionar al nuevo premier y comandante general del ejército, general Fernández Maldonado, aún antes de asumir el cargo. El ataque a la Primera Fase —con ribetes singulares de apasionamiento— tendrá efectos denigrantes para los afectados, que carecen de canales para responder. El impacto de este enorme esfuerzo se dirige principalmente a la Fuerza Armada. Se sabe que hay crisis en la cúpula castrense y que ésta será definitiva en determinar el curso político. Esto es evidente cuando se ve que el nuevo gobierno actúa confiriendo cada vez más poder a la Junta Militar que conforman los comandantes de las tres armas. El general Morales Bermúdez es más un presidente de la Junta que un presidente de la República; la Junta asume las máximas decisiones políticas y no sólo la designación del gobierno (presidente y ministros), como ocurría en la Primera Fase.³⁰ El primer año de la Segunda Fase mostrará también cómo en momentos de crisis el nivel máximo de decisión se traslada incluso al nivel de los mandos regionales del ejército. Todo ello abre espacio a la maniobra de oficiales reaccionarios, llenos de prejuicios y temores a lo popular, conformistas con el orden establecido y

29 Medida tomada en 1970 por la Primera Fase para dificultar los despidos masivos y la agresión patronal a los dirigentes sindicales. Aunque la Ley tuvo grandes vacíos que la hacían depender de la acción concreta del Ministerio de Trabajo, significaba un freno a los empresarios, estimado por los trabajadores. En los últimos años de la Primera Fase la acción del Ministerio de Trabajo —controlado por "La Misión"— adopta una política claramente antilaboral, que continúa con el cambio de esta Ley —marzo de 1978— luego de haberla hecho previamente inoperante en toda la Segunda Fase.

30 El papel de la Junta se limitaba a designar al presidente y los ministros —con acuerdo de aquél—, sesionando para todo lo demás con el gabinete, en el cual los comandantes eran como un Ministro más.

ambiciosos de compartir el poder que surge de este aparato de Estado. Pero todo será especialmente útil a la burguesía y a la derecha política para articular su ofensiva contra los militares progresistas: ninguna persona o medida progresista se libra del insulto y el anatema.

En medio de la ofensiva de la derecha, la depuración militar viene gradual primero y luego abiertamente. Caerán los generales Leonidas Rodríguez y José Graham en 1975³¹ y pocos meses después —luego de un putsch derechista frustrado—³² los generales Fernández Maldonado, De la Flor y Gallegos. El reacomodo incluyó, en el primer plano, a los directores de los diarios expropiados —haciendo más gris y monolítica la prensa oficial— y a todo nivel de funcionarios. Toda acción, paso a paso, era seguida de reiteradas seguridades de que nada se alteraba... salvo las personas. Ya en 1975, sin embargo, incluso el discurso político del presidente Morales Bermúdez se modifica³³ y hay cambios que afectan la política tercermundista —priorizando la relación con las dictaduras latinoamericanas— y provocan el abandono de todo intento de acercamiento a las organizaciones populares. Pronto el mismo gobierno acelerará su distanciamiento de la Primera Fase, acogerá las críticas derechistas a las reformas y se encaminará hacia la modificación de éstas: la propiedad social no se anunciará ya prioritaria sino limitada a las regiones deprimidas,³⁴ la Comunidad Laboral será modificada reduciendo la participación máxima del trabajador al 33%, en forma tal que en el fondo se elimina la copropiedad—, la reforma agraria perderá impulso, la estabilidad laboral dejará de existir —primero en los hechos y luego en la Ley—, a la vez que se modifica el tratamiento al capital extranjero.

31 La caída del general Rodríguez deja a los militares progresistas al margen de un comando decisivo —la Segunda Región Militar— alterando significativamente la ya deteriorada correlación de fuerzas para éstos. Pierden también el control del Sistema Nacional de Información (SINADI), decisivo poder sobre la prensa, la radio y la televisión. No se conoció entonces la reacción efectiva de los militares progresistas, posiblemente en la expectativa de que el general Fernández Maldonado asumiera el comando del ejército meses después. Este comando, sin contar con los mandos regionales, devendría formal y superestructural luego.

32 Este intento de golpe, a partir del cual se precipita la caída de Fernández Maldonado, estuvo encabezado por el general Bobbio, que recientemente integró la lista "empresarial" del Partido Popular Cristiano a la Asamblea Constituyente, encabezada por el ex-alcalde Bedoya, cabeza de la más radicalizada derecha de hoy.

33 Asumiendo poco a poco las tesis de la derecha en la crítica a la Primera Fase, en el diagnóstico de la crisis, en la limitación al curso de las reformas y en el reajuste del proyecto ideológico.

34 Este proyecto quedó más como una formulación discursiva que real, en tanto que al darse la Ley en 1974 ya la crisis limitaba seriamente su financiamiento. Aun así hubo críticas de los empresarios. Arrinconado luego en las regiones deprimidas —para que no compita con la empresa privada—, la falta de recursos contribuye a hacerlo insignificante en la economía.

Toda posición nacionalista irá desapareciendo en un régimen que poco a poco depende más de las presiones del capital financiero internacional, aun cuando le resulte al FMI un ejecutor indisciplinado del gasto. Se negociará la última nacionalización de Velasco —la Marcona Mining Co.— en alta suma, a la vez que se estrechan relaciones con el Departamento de Estado y se evita toda confrontación en el concierto internacional. No es por nada que el secretario de Estado, Henry Kissinger, puede afirmar satisfecho, al concluir su gestión, que ha tenido negociaciones "sin precedentes" con el gobierno peruano.³⁵

El telón de fondo —verdadera agresión contra el pueblo—es la administración de la crisis económica. No sólo se ha abandonado en su nombre toda reforma. Se ha declarado que sólo la inversión privada puede reactivar la economía y en función de este mito se sacrifica todo lo que queda en pie... sin reactivar nada. Se le otorgan incentivos más y más onerosos —el Certex es un ejemplo—; se cierran los ojos a la sobrefacturación y otras formas de fuga de capitales, a la vez que se paralizan inversiones y proyectos; se traban las reformas y todo apoyo a cooperativas y empresas de trabajadores se convierte en formal fiscalización. En 1977 el salario real promedio ya había bajado en un 35% con respecto a 1973.³⁶ Cada nuevo "paquete" de medidas económicas sacrifica más la economía popular, acicateando la protesta de las organizaciones. El régimen debe así endurecer el ceño, reprimir, impedir las huelgas y la protesta popular. Impone un estado de emergencia de 14 meses a partir de julio de 1976, mediante el cual ilegaliza toda huelga, reprime a los dirigentes sindicales, persigue a dirigentes políticos de izquierda y desarticula toda protesta popular. Recurre al "toque de queda", a la deportación de opositores y al cierre de revistas independientes, con lo cual mantiene el monopolio de la información y la propaganda. La posterior reapertura de revistas sólo favorecerá a la derecha por gran tiempo.

La respuesta popular superó desde 1977 toda expectativa precedente. El régimen quedó aislado progresivamente, mientras diversas voces denunciaban en el extranjero la violación de los derechos humanos por una política represiva de carácter preventivo que, si bien no llega a los excesos de las dictaduras del cono sur, muestra en forma alarmante la desaparición de derechos sociales y políticos fundamentales. Esta política parte de calificar de subversiva toda crítica al manejo económico del país y a los sucesivos "paquetes" económicos. Impide la respuesta popular —huelgas y mítines— a la vez

35 Declaración hecha en Nueva York y reproducida en cable de France Press. Véase Pease-Filomeno, *"Cronología política 1976"*. Hecho No. 4673, p. 2206, DESCO 1977.

36 Véase *Actualidad Económica del Perú*, n. 3, p. 11. 1973 fue el punto más alto de un lento incremento del sueldo y los salarios mínimo y medio desde 1968. Comienza entonces la irremisible caída.

que anula toda posibilidad de negociación sindical y persigue a los dirigentes sindicales y políticos. La necesidad de entenderse con una burguesía que presiona para tener espacio propio —y directo— en el gobierno descarga siempre hacia la izquierda y el sindicalismo el garrote represivo. El esquema rígido de un año "de emergencia" se viene abajo cuando todo el movimiento popular unificado realiza un paro de 24 horas el 19 de julio de 1977 contra las medidas económicas. Ni las antiguas divisiones de la izquierda, ni la represión y el marco legal de la suspensión de garantías constitucionales³⁷ pudieron evitar la paralización total del país en una jornada que sólo es comparable con las luchas de los años treinta. Este paro fue precedido de movilizaciones en las calles, en muy distintos puntos del país, expresando la protesta de un pueblo que el gobierno no podrá ya silenciar. La voz de la Iglesia católica —de gran influencia nacional— se escuchó endurecida con el gobierno tanto en la pastoral de los Obispos del Sur como en la defensa que el cardenal primado hizo de los despedidos por el paro. En pocas ocasiones se ha visto al gobierno tan aislado como entonces. Ni los partidos de la derecha —con los cuales había buscado incómodo diálogo— ni la burguesía empresarial, dejaban de presionar reclamando más concreción en el viraje, a la vez que exigían un calendario para la entrega del poder.

En agosto de 1977, habiendo recorrido dos años de gradual viraje, el gobierno anuncia un cronograma para la entrega del poder a "la civilidad",³⁸ a la vez que deroga el estado de emergencia. Ha avanzado mucho en el desmantelamiento de las reformas. Toda base popular —que en la década el gobierno fue incapaz de articular, aunque aprovechó el consenso pasivo y el impacto de las reformas— se sitúa ahora frente al gobierno. La coordinación —aún fragmentaria —de la izquierda y el movimiento popular ha enfrentado en la coyuntura de julio al régimen, pero la derecha cuenta con los viejos partidos tradicionales —el Apra, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano— que remozan sus casas políticas con amplios recursos económicos y con la ventaja de situarse "dialogantes" frente a un gobierno debilitado que los necesita y les deja un mayor margen de juego.

VI. EN BUSCA DE UNA SALIDA POLÍTICA: CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y CRONOGRAMA POLÍTICO PARA VOLVER A LOS CUARTELES

37 Que anula los derechos de reunión y tránsito y permite la detención sin orden del juez, etcétera, a la vez que impone el toque de queda en las principales ciudades y otorga el marco legal para despedir a todo trabajador en huelga —o acusado de propiciar la huelga blanca—. En conjunto, las disposiciones de emergencia dan el marco para detener y perseguir a todo dirigente sindical y popular.

38 Término siempre referido no tanto a lo "no militar" como a la clase política tradicional —de cuello blanco— defensora de los intereses dominantes.

El deterioro del régimen militar en julio de 1977 es visible desde cualquier perspectiva. Es un gobierno aislado que busca a tientas una salida política. Encuentra una salida a su aislamiento convocando a elecciones para instalar una Asamblea Constituyente el 28 de julio de 1978 y anuncia que un tiempo después —en 1980— entregará el gobierno a los que resulten elegidos, según el ordenamiento jurídico que establezca la nueva Constitución. Se trata del cronograma político que reclamaban insistentemente los partidos tradicionales desde 1976, cuando el gobierno se acercó a ellos en busca del apoyo que ya ni en los sectores más despolitizados del pueblo encontraba. Se trata pues de la transferencia política "a la civilidad" que la mayoría de los empresarios demandó al ver el deterioro progresivo de la conducción económica y política, a pesar de que para estos interlocutores la demanda básica estuvo siempre centrada en la corrección del rumbo de las reformas. Para julio de 1977 estos grupos han conseguido ya que se elimine de las reformas todo contenido popular y que se corrija "mucho de lo que en éstas les afectaba. Los empresarios, sin embargo, pugnaban entonces —y aún ahora— con un Estado empresario, que defiende el poder de su tecnocracia y que continúa los gastos militares.

El paro nacional del 19 de julio de 1977 fue expresión del amplio rechazo popular al gobierno y a su política económica y represiva. No quedaba entonces el menor rezago de expectativas reformistas, ni siquiera en los sectores menos politizados. Las pocas organizaciones que en la Segunda Fase articularon algún apoyo coyuntural habían perdido para entonces toda significación —como el Frente de Defensa de la Revolución o la CTRP nacional— o evolucionaban hacia una franca oposición al régimen, ligándose con el resto del movimiento popular —caso de la CNA o la CTRP de Lima—. El cronograma y la convocatoria a la Constituyente no provocaban entusiasmo en el campo popular, porque era conocida la fundamental asimetría que existe en las elecciones para beneficio de los grupos de poder. Pero aun así, tras la experiencia de varios años de intensa represión, el nuevo proyecto político del gobierno suponía un mínimo de apertura política en los márgenes de represión, aun cuando desde la partida se viera que el gobierno repetiría la marginación del derecho al voto a dos millones y medio de peruanos por ser analfabetos.

Con el cronograma y la Constituyente el gobierno cumple también con atender la expectativa del frente externo, en el cual es evidente la presión norteamericana por volver a la formalidad democrática. El gobierno necesita del apoyo del gobierno de Carter para sortear sus ya insostenibles coyunturas financieras y este apoyo tiene como precio su propia declaración de finitud política. Probablemente ni

el hermético y disciplinado campo castrense dará al gobierno apoyo para seguir indefinidamente en el poder.

Hay así una unánime demanda de cambio político, con distinto contenido. Esta unanimidad no será igual en cuanto a la fórmula adoptada, ni siquiera en el campo de la burguesía y sus aliados políticos. Resulta evidente que la fórmula adoptada coincide con la propuesta del partido aprista en la ronda de conversaciones previas, aunque no se concedan las elecciones municipales, también reclamadas por el APRA. El Partido Acción Popular —del ex-presidente Belaúnde— reclamará elecciones inmediatas y rechazará la Constituyente retirándose de la primera competencia electoral de la década y dificultando con ello el carácter de "ensayo general", previo a la recomposición de alianzas, que ésta tenía. La opción del gobierno —y su coincidencia con el Apra— parecen estar reflejando la necesidad de crear un tiempo político y un espacio adecuado para el reacomodo de fuerzas tras diez años de gobierno militar. En ese tiempo, se actuará tanto al nivel de los partidos como directamente en los grupos de poder económico, pues la burguesía sigue en reacomodo tras los cambios operados en la década y este reacomodo es más difícil en una coyuntura de crisis económica como la actual.

Más aún, se trata de rediseñar el sistema político, porque resulta inviable la pretensión de gobernar al país a partir de las instituciones propias del llamado Estado oligárquico. El Perú no puede ya manejarse con la comodidad de antaño: la presencia activa de masas urbanas y de un movimiento popular más orgánico que en el pasado, repetiría tiempos de crisis política. Un régimen exclusivo y excluyente como el que imperó en el pasado obligaría a una constante y compulsiva represión que incluso a los militares hoy les resulta difícil. Hay, pues, elementos para graduar la salida política y buscar un sistema más eficiente para las necesidades de la burguesía.

El margen de juego que tuvo la Fuerza Armada, al eliminar a las fracciones oligárquicas, ha disminuido en buena parte y se hace frente ahora a una burguesía modernizada que, en clara ofensiva política, ha logrado más y más concesiones de un gobierno que es heredero de la Primera Fase, de ese "tiempo abominable" para muchos empresarios que por primera vez se sintieron en una relación lejana con el poder cotidiano, aun cuando tuvieran amplio campo para "hacer buenos negocios". Esta burguesía aún carece de un proyecto político orgánico. Beneficiaria de la depuración antioligárquica, no logró insertar a sus cuadros orgánicos y los militares, significaron no sólo variantes en el proyecto político liberal de la burguesía de los años sesenta, sino ahora un poder económico concentrado en el aparato estatal, que interviene por derecho propio en las negociaciones. Los empresarios avanzan en la integración corporativa con dificultades para lograr un partido orgánico. Forman la Unión de

Empresarios Privados del Perú para contrarrestar la dispersión de sus esfuerzos en la década, pero tienen que articularse con varios partidos tradicionales, entre los cuales el Apra tendrá siempre la primacía de la eficacia partidaria, pero será visto con desconfianza por su tradición populista, a pesar de haber sido en el pasado artífice de grandes servicios a la clase dominante. En conjunto el nuevo bloque conserva todavía problemas particulares para una recomposición orgánica. Las presiones del capital financiero internacional; el juego de una tecnocracia civil y militar que es interlocutor con poder para el capital externo y nativo, así como el conocido rechazo de parte de la Fuerza Armada a un proyecto orgánico totalitario y represivo, al estilo del cono sur,³⁹ constituyen algunos elementos del panorama. Frente a este poder, un movimiento popular más maduro, aunque aún fácilmente desarticulable, embate y es rechazado por una represión selectiva e intermitente que aplica un gobierno desgastado pero sin alternativa viable que lo remplace en el corto plazo.

La apertura electoral se ubica en 1977 entre las tensiones de esta recomposición —que divide incluso a parte de la cúpula militar— y las dificultades de administrar la crisis económica. En esta política se expresa la pugna intraburocrática —y entre empresariado y tecnocracia—, llevando a límites extremos la situación económica. La burguesía cuestiona desde fuera y desde dentro la política del gobierno. El fracaso del ministro Piazza —industrial connotado y esperanza de los empresarios en 1977— en constreñir y disciplinar el gasto público lleva a buena parte de los empresarios a optar por una radical y tradicional oposición derechista simbolizada en la candidatura del ex-alcalde Bedoya. Entre las críticas de la derecha, la presión del FMI y el rechazo popular, el gobierno administra la crisis cargando sobre el pueblo sucesivas devaluaciones⁴⁰ y paquetes económicos que no reactivan la economía, que restringen cada vez más el mercado interno y pauperizan a amplios sectores medios y populares. Entre 1977 y 1978 se negocia "de rodillas" ante el FMI y aun así se incumplen sus dictados, profundizándose la crisis. A la acusación de alterar las cifras oficiales sobre reservas internacionales⁴¹ se agregarán grandes concesiones al capital imperialista en materia petrolera y minera —que sin embargo no logran efectos inmediatos—, la devolución de empresas al sector privado —sin alcanzar la

39 Recuérdese por ejemplo los reiterados casos en que los comandantes regionales negocian con el movimiento popular en vez de reprimir drásticamente a la usanza del cono sur. Si bien se da en un cuadro que es en sí represivo, resalta esta diferencia.

40 De septiembre de 1975 a mayo de 1978 la tasa cambiaria ha variado de 38.70 a 150 soles por dólar norteamericano.

41 Alteración de cifras referidas a las reservas internacionales así como al déficit fiscal. Véase, *Actualidad Económica del Perú*, n. 2, p.1.

deseada "confianza"— y la búsqueda desesperada de apoyo político exterior para salvar la coyuntura.⁴² En más de un momento, la sensación de "tocar fondo" y la cercanía de una virtual cesación de pagos, explicará una dinámica de descomposición pocas veces vista. En la raíz de esta situación está la pugna de las propias partes del poder y la presencia real de intereses que logran ganancias aun en medio del máximo deterioro de la economía. En la explicación de su impresionante durabilidad está la propia conformación del poder y el complejo juego de sus partes.

Imponiendo su cronograma electoral, el gobierno promoverá una apertura en el nivel político — hacia el campo electoral—al mismo tiempo que su política económica le exige una represión al menos selectiva del movimiento popular. Esta contradicción ha de estar presente hasta el momento mismo de las elecciones y aun después. El tiempo político no sólo exige un periodo de maduración. La administración de la crisis resulta fundamental en este proyecto político y cada nuevo "paquete" complicará la escena electoral.

Una campaña electoral "al trote"

Con esta contradicción irresuelta que pesa sobre el conjunto de los actores, el calendario electoral fijará tiempos muy cortos para la inscripción de partidos —con listas de cien candidatos— y para la realización de una campaña electoral relámpago, con características peculiares pues, tras una década de monopolio militar del gobierno, todos los partidos se presentarán irresponsables de lo que pasa en éste, es decir de la política que día a día agobia más al pueblo en lo económico y en la vigencia de los derechos esenciales. El corto tiempo de la campaña —corto incluso para obtener las 40 000 firmas necesarias para inscribir un partido— favorecerá de entrada a los partidos tradicionales, que a pesar de haber estado en receso por diez años cuentan con una estructura organizativa más antigua y tienen los recursos económicos para financiar personas, publicidad y largos desplazamientos por el territorio. El desconocimiento del proceso electoral, acentuado en la década, será también un factor favorable a la derecha. Figuras tradicionales como las de Haya de la Torre, Bedoya o Belaúnde —con cincuenta años en la vida política y larga trayectoria de persecución el primero; con altos cargos públicos suficientemente lejanos para borrar errores y claudicaciones, los otros dos resultan identificadas por el pueblo en las primeras encuestas de opinión como "la civilidad" alternativa a los desgastados líderes

⁴² Nos referimos a las aparatosas negociaciones diplomáticas en Washington que incluyeron la búsqueda de apoyo de la esposa del presidente Carter en una muy publicitada entrevista del canciller peruano.

militares. No ocurre lo mismo con una izquierda mayoritariamente joven, con poca experiencia electoral, pues ha actuado básicamente en el movimiento sindical, obrero y campesino, con reglas de juego muy distintas a las del campo electoral y con una tradición de fraccionalismo que aún pesa.

Sin embargo de los cortos plazos y aun cuando para la izquierda la escena electoral es lugar de trabajo que debe compartirse con la dedicación al campo sindical, siempre perseguido, la inscripción de partidos en sí misma sorprenderá a los primeros observadores. Se inscriben trece partidos, de los cuales seis pueden ubicarse gruesamente en el campo popular. La Democracia Cristiana (DC) y Acción Popular Socialista (APS) representan los restos radicalizados de los partidos reformistas de la década del sesenta; el Partido Socialista Revolucionario (PSR) agrupa a sectores radicalizados a partir del velasquismo; el Partido Comunista representa a la antigua organización de izquierda, ya alejada de su apoyo a la Segunda Fase; la Unidad Democrático Popular (UDP) logra integrar en frente a diversos partidos marxistas-leninistas situados a la izquierda del Partido Comunista; y el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP) reunirá a organizaciones y partidos marxistas-leninistas y trotskistas. La sola constitución de estos dos frentes y más aún, su inscripción y la del PSR, que participan por primera vez en la arena electoral, será de por sí un hecho significativo para muchos inesperado.

Entre los partidos conservadores, el partido aprista y el Partido Popular Cristiano del ex-alcalde Bedoya, representarán directamente las opciones de centro y derecha respectivamente. El resto de los partidos tiene significación regional en el mejor de los casos —el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos— y recuerda, en otros, a viejos partidos de los líderes oligárquicos ya fallecidos —los ex-presidentes Odría y Prado— cuyos seguidores reclutarán viejos recuerdos y restos de antiguas clientelas locales. Como señal casi folklórica la hija del ex-presidente Leguía (1919-1930) inscribirá también un partido, que luego sacaría menos votos que las firmas presentadas. El retiro de Acción Popular Belaundista impedirá conocer su magnitud en el presente y distorsionará los resultados de aquellos partidos que le son más cercanos —el Apra y el Partido de Bedoya Reyes—, sin que hasta la fecha haya proyecciones claras sobre cuál de los dos recibió el supuesto caudal electoral belaundista y en qué proporción.

El Apra en su campaña procurará presentarse como "izquierda democrática", levantando sus banderas de los años treinta y procurando borrar la imagen reaccionaria de su alianza con las fracciones oligárquicas en los años sesenta. Será el "leal opositor" que valora las reformas del gobierno y... ofrece más, aunque concentra su ataque en las medidas económicas, junto con todo el conjunto de partidos, y

se presenta como alternativa democrática frente a un régimen militar desgastado. Logrará expresar a sectores medios y populares trabajados a partir de la más estable, amplia y experimentada organización partidaria, que ni en los años de la Primera Fase dejó de operar localmente. Criticará al gobierno, pero con mesura que no deja de ofrecerse siempre como la salida política "natural" del régimen militar. Ello en momentos lo distanciará del voto más ligado al empresariado aunque el viejo partido tendrá siempre lazos empresariales antiguos y cuadros políticos capaces de tranquilizar a ese sector.

Con un nuevo espacio por el retiro de Belaúnde —de quien fue aliado hasta fines de 1968—, el ex-alcalde Bedoya trabajará decididamente sobre la burguesía resentida con los militares de la Primera Fase —mostrando ahora un notorio revanchismo— y sobre capas medias de diverso nivel a las cuales impactará con una campaña millonaria que articula distintas lealtades locales y la imagen de eficiencia que procura rescatar Bedoya de su gestión municipal. Como contenido básico de esta campaña se encontrará un sistemático ataque al régimen, procurando captar todo tipo de descontento y el sentimiento antimilitarista que es ya parte de muy diversos sectores sociales.

Lo menos importante de la campaña resultaba así la Constitución supuestamente en discusión. Tanto para la derecha como para la izquierda, la coyuntura era ocasión inicial para el contacto electoral con las masas. Y la mayor parte del pueblo tenía el interés puesto en la situación económica, o en la frustración de reformas con la secuela de represión selectiva que afectaba a todo tipo de organizaciones populares. Éste y no otro era el centro de atención para las mayorías y éste fue, a su manera, el centro de la campaña electoral, en medio de la cual hubo dos importantes paros nacionales, una huelga de hambre de más de setenta trabajadores despedidos que duró casi cincuenta días, un nuevo paquete económico y nada menos que una ley que terminaba formalizando la desaparición de la estabilidad laboral.

VII. LA COYUNTURA ELECTORAL DE 1978: ENTRE LA PROTESTA POPULAR Y LA REPRESIÓN

La ya deteriorada situación social y política de julio de 1977 se agudizará mes a mes bajo un régimen que no puede encontrar salida de corto plazo a la crisis económica y que nada puede ofrecer al pueblo que no sea la exigencia de más y más sacrificios. Siguiendo el desarrollo contradictorio —entre apertura electoral y represión para imponer su política económica— procurará demorar desde principios de 1978 la aplicación del nuevo paquete de medidas económicas que reclama el FMI en base a los propios compromisos aceptados por el gobierno. En vísperas de las elecciones —postergadas del

4 al 18 de junio— el octavo "paquete" de medidas económicas caerá en forma sorpresiva, cuando todos los observadores lo aguardaban para luego de las elecciones. Un paro general de 48 horas será acatado unánimemente en todo el país, al mismo tiempo que en muchos pueblos la protesta popular se toma activa e incluso violenta, dando muestras de mayor organización local y mostrando niveles más profundos de conciencia política, aun en medio del amplio espontaneísmo —verdadero clamor popular— que hace vibrar al país más allá de la conducción orgánica de cualquiera de las dirigencias nacionales.

Las jornadas del 22 y 23 de mayo —antecedidas y seguidas de acciones locales diversas— rechazaron masivamente la política del gobierno, luego de que éste impusiera alzas del 41% en la canasta de bienes esenciales, reduciendo el salario real en un 20% adicional, lo que significa que ahora éste ha llegado a ser 47% inferior al salario real de 1973. Se expresaba doliente el grito de un pueblo que ya no puede siquiera satisfacer las necesidades vitales que hace pocos años —aun en condiciones misérrimas— obtuvo.⁴³

El rechazo masivo a la política del gobierno tomó formas violentas, aunque estaba muy lejos de constituir en sí amenaza por la fuerza al poder establecido. El pueblo protesta... pero sin armas, reaccionando sí violentamente, en especial ante la represión abierta de las fuerzas "del orden" que en más de un caso han disparado ante manifestantes.⁴⁴ En ningún momento el gobierno perdió el control militar del país. Pero todo régimen, por más fuerza que tenga y aún en víspera de elecciones, requiere márgenes mínimos de consenso. Esta ausencia de legitimidad la demuestra la protesta viva del pueblo. Ante el rechazo popular unánime, el gobierno necesitaba crear un enemigo grande, un "chivo expiatorio" que le permitiera recomponer ese mínimo consenso, que hiciera "justificable" la represión violenta con la que el aparato militar respondía al pueblo. Una verdadera guerra psicológica se preparó desde la televisión, la prensa y la radio, denunciando "la subversión", culpándola incluso de accidentes fortuitos de militares y recubriendo así la acción represiva.

El gobierno reprimió desde días antes del paro nacional. Allanó domicilios y detuvo a dirigentes de los partidos de izquierda —entre ellos a varios candidatos y en un caso aislado a un periodista de extrema derecha— cayendo sorpresivamente sobre quienes no habían aún iniciado la ya rutinaria vida

43 Las siempre escasas cifras indican que el consumo de calorías per capita es de 1 584, cuando el mínimo normal se estima en 2 400. Pero la estadística se basa en el salario mínimo, lo que significa que gran parte de la población —subempleada y desempleada— está en condiciones aún inferiores.

44 Puede verse al respecto el testimonio del Obispado de Huancavelica, ampliamente difundido.

clandestina.⁴⁵ Decretó el estado de emergencia, que sólo levantó una semana antes de los comicios —pero dejando en suspenso las garantías constitucionales que prohíben deportar detener sin orden judicial—; apresó a dirigentes, maestros, sindicalistas y políticos, metiendo en un solo saco a todos sus enemigos políticos de la izquierda, calificándolos de subversivos y de agitadores callejeros. Cerró todas las revistas independientes y los programas políticos de televisión, aunque se mantuvo la propaganda pagada principalmente por los partidos de derecha. El aparato de propaganda oficial hizo verdadera campaña en beneficio de la derecha, con sólo atacar sistemáticamente a la izquierda, calificada de subversiva con furor y concentración sin precedentes.

Más aún —en un caso que abre un grave precedente violatorio de derechos esenciales— el gobierno deportó a la Argentina a más de quince dirigentes políticos y sindicales —varios de ellos candidatos— sin esperar a que ese u otro país concediera el respectivo asilo, ni dar opción alguna a los desterrados para elegir el lugar. De esa forma, con evidente acuerdo entre dictaduras, funcionó en Jujuy una cárcel exterior argentino-peruana, hasta que días después se dio el asilo el pase para salir del país.⁴⁶ Las elecciones del 18 de junio tienen el triste precedente de realizarse con candidatos deportados, con detenidos y perseguidos políticos. Pero, más aún, se detuvo a varios dirigentes y candidatos que concurren a ejercer su derecho de voto y se deportó a otro más, a pesar de las garantías dadas por el Jurado Nacional de Elecciones.

Los golpes represivos sólo han tocado al campo popular. Ningún dirigente del Apra o el PPC fue molestado. Los sindicatos y partidos de la izquierda tienen muchos detenidos, perseguidos y deportados. A la vez el gobierno disolvió la Confederación Nacional Agraria (CNA), que apoyó el paro, denunciando su "utilización" por uno de los partidos de la izquierda. Sus dirigentes, perseguidos unos y detenidos otros, simbolizan la marginación y el enfrentamiento del campesinado y la frustración de una reforma agraria que al final le niega todo poder político real.

El gobierno llega así a las elecciones atacado desde la izquierda y la derecha, por la conducción económica y la represión política, enfrentando al pueblo y sin que sus grandes concesiones a los

45 Es decir el esconderse a tiempo para evitar ser apresados, cosa que en el Perú es ya parte de la elemental cultura política de la izquierda.

46 Jujuy volver a ser utilizada como cárcel desde el mismo día de las elecciones —18 de junio— al deportar el gobierno al general Leónidas Rodríguez. Al finalizar junio se sabía en Lima que este deportado seguía aún en esa ciudad en condición ficticia de detenido. Al mismo tiempo Ledesma, líder del FOCEP, denunciaba el maltrato recibido en Jujuy, donde al recibirlos les anunciaron que serían tratados como "prisioneros de guerra". Los hechos mismos nos dan aquí el triste espectáculo de la alianza de los tiranos en verdadera guerra contra sus pueblos.

empresarios y la derecha política le brinden un respiro; gobierna el país sólo en base a la represión selectiva —pero no puede parar una huelga nacional del magisterio que se va ampliando— y va perdiendo toda credibilidad, incluso en sus nunca probadas denuncias de subversión.

Resultados preliminares: la izquierda alcanza hasta el tercio de los votos

Las elecciones a la Constituyente se realizan así en un clima de opresión y represión para la izquierda. Esa izquierda, sin embargo, obtiene más del 30% de la votación sin que la represión y el trote de la campaña permitiera a sus partidos —de modestos recursos económicos— recorrer todo el país, usar eficientemente los medios masivos de difusión —adicionales a los programas gratuitos— y dar a conocer masivamente a sus candidatos.⁴⁷ Esta cifra indica un hecho sin precedentes en elecciones anteriores.

El triunfo del "opositor leal" —entre doce partidos opositores, dado que ninguno apoyó explícitamente al régimen— tiene un importante significado para la conformación de nuevas alianzas. El partido aprista —con el 35.34% de los votos válidos— tiene un relativo incremento sobre el porcentaje de votos obtenidos en las elecciones generales de 1963⁴⁸ —última vez en que participó solo— y ha logrado ampliar su electorado desde una posición centrista con recurrencia permanente al lenguaje radical y a la apariencia de izquierda.⁴⁹ Parte de su electorado puede venir de las filas populistas y de sectores medios en los que el Apra es parte central de la cultura política. El resultado es fruto de la propia organización —no escasa de recursos pero también de la cuidadosa línea del partido frente al gobierno, que le permitió no aparecer aliado de éste sin por ello enfrentarse a él en términos reales.

La extrema derecha fracasa con su candidato Luis Bedoya, abogado de conocida elocuencia y

47 En conjunto la izquierda obtiene el 36.25% de los votos válidos (3 511 895), incluyendo dentro de ésta al FOCEP (12.34%), al PSR (6.62%), al Partido Comunista (5.91%), al UDP (4.58%), al FNTC (3.86%), al PDC (2.37%) y a ARS (0.57%). Es obvio que este conjunto no es una unidad y que algunos analistas podrían excluir a algunos grupos de marcado acento populista —el FNTC, por ejemplo—; pero viendo globalmente el espectro político ésta parece la división gruesa del electorado, en relación a los partidos directamente vinculados a los grupos de poder, que se ubican frente a esta izquierda en términos globales.

48 Entonces alcanzó el 34.36% de la votación.

49 Llegando incluso a "apoyar" el paro nacional de mayo de 1978. Al respecto cabe recordar que la Central Sindical Aprista —la CTP— rechazó el paro nacional del 19 de julio de 1977 y ordenó a sus bases no parar, medida que fue obviamente desacatada.

oportunista trayectoria, que jugó todas sus cartas a recoger el apoyo empresarial —con las más rancias recetas liberales— procurando juntar todo tipo de variantes del resentimiento con el gobierno, expresadas en un antimilitarismo a ultranza. Un 23.78% de los votos válidos es magro resultado para un partido que según varias revistas invirtió no menos de cien millones de soles en la campaña y que por añadidura aparece beneficiado por lo menos con parte del voto de Acción Popular Belaundista.

Hay en el espectro electoral un evidente giro hacia la izquierda. Esto ocurre no sólo por el hecho de que ésta alcanza un 30% jamás logrado, sino por la derrota de Bedoya, el candidato de los empresarios. Ello nos recuerda un data de la historia política peruana: la mayor parte de las veces que la derecha presentó un candidato orgánico el resultado le fue adverso... y la derecha recurrió pronto a su alternativa ... el caudillo militar. Ahora, luego de grandes transformaciones —en dos décadas de sostenida modernización económica y social— esta resultante tendrá formas más complejas de resolverse. En los resultados y la campaña no sólo es notorio que la derecha pierde con Bedoya, sino que el Apra tiene que mostrar su cara radical —más que el populismo concreto de otros tiempos— para ganar votos. Estas fueron unas elecciones apresuradas, cortadas y sin que la derecha compartiera responsabilidad de gobierno en periodo reciente. Será más difícil en 1980 mostrarse tan ajeno al poder, aunque es cierto que los militares siguen colaborando a ello por la forma de retención y manejo del gobierno.

En la izquierda, constatada la importancia de la votación obtenida por el conjunto de partidos, lo sorpresivo ha sido la distribución que favorece al FOCEP con un 12.34% de los votos válidos. Este frente es reciente y en sus filas la figura de Hugo Blanco atrajo la votación radicalizada de diversos sectores populares. Pero lo integran también líderes sindicales y abogados de mineros y otros sindicatos, que fueron perseguidos en toda la década y tienen el respeto y la adhesión de amplios sectores. Es evidente que la izquierda no es un bloque coherente; cierto es que la década está llena de ejemplos de fraccionalismo, hegemonismo y dificultad de unificación de sus fuerzas: Pero si no se analiza aislada la Asamblea Constituyente, si se mide la importancia de la unificación lograda en las jornadas sindicales del 19 de julio de 1977 y del 22 y 23 de mayo de 1978, puede haber esperanzas de una actuación al menos coordinada en los asuntos esenciales de la Asamblea y el campo popular.

En conjunto el espectro electoral se ha radicalizado respecto a las elecciones pasadas. Minimizadas las fuerzas que expresaban a las fracciones oligárquicas, derrotada la candidatura empresarial más derechista, el intento "socialdemócrata" del Apra queda al frente, con un tercio de votos a su izquierda en espera de liderazgo y unificación.

VIII. ¿TERCERA FASE?

Los resultados electorales pueden satisfacer al gobierno sólo en parte.⁵⁰ El triunfo del Apra es visto en la cúpula militar con alivio —y con poco disimulado entusiasmo en algunos casos— dado que el revanchismo de una burguesía resentida tocó la fibra institucional del ejército con sus ataques radicales a la Primera y la Segunda Fase. Pero hay preocupaciones diversas que tampoco pueden disimularse: la alta votación de Hugo Blanco —que reclamaba nada menos que la disolución de la Fuerza Armada— y el conjunto de la votación de izquierda, superando el 30%, representan la parte más lúcida de un rechazo popular que es mucho más amplio, pues no vota una alta proporción del pueblo⁵¹ y sí se expresa en la acción sindical de diverso tipo. La prolongada huelga de maestros —contra la cual toda represión ha sido inútil— y las posteriores movilizaciones de mineros y empleados públicos sirven de indicadores de un panorama gris que oculta, con los diarios controlados, la creciente incapacidad del gobierno frente a la tensión social.

Pero si algo hay evidente es que a partir de agosto el gobierno no tendrá sólo a la Fuerza Armada en la cúpula. Es una etapa de forzado cogobierno luego de una década de monopolio del poder. Un gobierno deteriorado como éste no puede enfrentar fácilmente a partidos recientemente confirmados en la formalidad electoral. Podría ser éste el inicio de una Tercera Fase del gobierno de la Fuerza Armada, en la que sus representantes castrenses compartirán gradualmente el poder con políticos civiles que aspiran a representar —con variante organicidad— a una burguesía cuyas fracciones se mueven y reacomodan aún, luego de varios años en que el viraje de los militares les amplió aún más el terreno, aunque sin lograr la eficiencia que exige la crisis y que reclaman los empresarios.

Pero en, esta fase hay que destacar que la lenta recomposición del poder en la sociedad peruana toma un nuevo giro con la presencia activa de un movimiento popular capaz a la vez de paralizar efectivamente el país y al mismo tiempo, a pesar de la represión, capaz de obtener un tercio de los votos. Se trata de un hecho macizo que revolotea en más de una cabeza militar y civil, tanto

50 El sistema electoral facilitaba la dispersión, de modo que las cien curules se repartieran sin dar a ningún partido la mayoría absoluta.

51 A los dos millones y medio de analfabetos marginados del voto, debe agregarse un millón más entre omisos, votos nulos, viciados o en blanco, lo cual hace gruesamente que exista un 49% de adultos que, estando en edad de votar, no se han expresado por las doce listas de candidatos.

empresarial como política. Un voto popular hacia la izquierda asusta a la burguesía que desde los años cincuenta expresa su mala conciencia hablando de que "las barriadas invadirán Lima", la ciudad capital que con casi cuatro millones de habitantes tiene más de tres viviendo en condiciones misérrimas. Esta frase, fácil de escuchar en cada coyuntura de crisis, se repite ahora en referencia al voto de izquierda y a la imagen de Hugo Blanco. Es claro que este temor potencia las soluciones drásticas, la represión abierta que parte de la derecha reclama; pero es cierto también que los regímenes del cono sur están muy desprestigiados nacional e internacionalmente, y que las condiciones sociales, políticas y militares no son iguales, pues nadie podría mostrar aquí situaciones de "guerra interna", por más versiones que en tal sentido propague un gobierno deteriorado y sin margen de credibilidad. En periodos más largos, sin embargo, ésta es una alternativa que no puede desaparecer del espectro político y que es preciso evaluar con lucidez.

Pero la Tercera Fase tiene ante sí un cúmulo de retos que posiblemente superan la capacidad de un régimen desgastado. Al mismo tiempo que emprende un diálogo, siempre difícil, con los representantes políticos tradicionales —coexistiendo el gobierno con una Constituyente elegida— el régimen tiene que pasar del simple viraje —que corrigió las reformas— a la concreción de un nuevo sistema político, diseñado a partir de alianzas estables. En la escena Constituyente debe definirse el nuevo papel de la Fuerza Armada, que varias veces ha reclamado el presidente Morales Bermúdez. Ese papel pretenderá plasmarse en la propia carta constitucional y, según las palabras del presidente, no podrá ser marginal al poder político ni estar lejano de sus campos definitorios, tal como entiendo fue antes de 1968. Es obvio que esta apreciación —negada por la historia— exagera una de las dimensiones de la negociación. Junto con ella la Constituyente ha de tener muchos campos de conflicto: desde el voto a los analfabetos, hasta lo que atañe a las reformas y al articulado referente a los derechos humanos y a los derechos políticos. Tal como en el pasado, ello puede resultar formal e inaplicado. Pero el diseño del régimen político y el poder del Estado en la economía serán cuestiones que tocarán no sólo el nivel del debate público sino el oscuro campo de las negociaciones entre los partidos tradicionales, la cúpula militar y el empresariado. Todo ello a la vez que se procura —entre presiones drásticas del capital financiero internacional— salir de una crisis económica ante la cual ningún paso ha tenido aún resultados alentadores.

En este cuadro político el viejo partido aprista —alimentado con los "petrodólares" de su similar venezolano— se ofrece como el aliado estable de la cúpula militar, y procura mostrarse a la burguesía como eficaz interlocutor, capaz de conciliar un proyecto político "democrático" y a la vez propiciador

de buenos negocios. Lo "democrático" tiene como trasfondo la capacidad de este partido para articular el apoyo de capas medias y clases populares, en torno a un proyecto estable. Puede invocar el precedente de sus eficaces servicios a la burguesía agroexportadora de los años sesenta.⁵² Pero la burguesía tiene muchos elementos que no están dispuestos siquiera a la concesión populista y que ven con preocupación la coincidencia de las viejas tesis del Apra con el estatismo presente en militares y tecnócratas de hoy. A ello habrá que agregar rezagos no despreciables de antiaprismo tradicional en grupos medios, civiles y militares. No siendo ya la izquierda el fantasma político, como en tantas décadas pasadas, el Apra será denunciado por una izquierda de base popular, capaz de avanzar sobre el actual electorado aprista. El hecho de que esa izquierda se haya hecho presente con éxito en la escena electoral, y no sólo en el campo sindical, es un reto que muchos elementos de la burguesía sólo avizoran resolver con represión.

Queda también un campo importante a otras expresiones de la burguesía, como el Partido Popular Cristiano (PPC) de Bedoya o Acción Popular de Belaúnde. En este campo las posibilidades de construcción de un partido orgánico de los empresarios no se abandonan, aunque se muestra la intención de articular una gran alianza —endeble aún— de estos partidos y el Apra. La cercanía de las proyectadas elecciones, 1980, pone trabas a todas estas fuerzas del poder: se mueven entre el reclamo de medidas concretas que suponen un cogobierno implícito con los militares y la necesidad de que el pueblo no los identifique como parte de un régimen opresor y en decadencia que ha de endurecer aún más la carga económica sobre el pueblo, porque no puede ofrecerle ni "migajas" populistas en el corto plazo.⁵³

En el Perú de hoy se expresa con particular signo el intento de diseñar una "democracia restringida", con sabor a transnacionales, que propicia la política del actual gobierno norteamericano. Esta política encuentra en el partido aprista un singular y apreciado interlocutor, a pesar de sus dificultades para expresar a todo el campo burgués. El gobierno de Carter impulsa esta dirección en respuesta al cuestionamiento que en su propia sociedad se hace del rumbo dramáticamente represivo que América

52 Periodo en el cual fue capaz de impedir la reforma agraria en los complejos agroindustriales, a la vez que retenía el apoyo de esos trabajadores con concesiones concretas y confusiónismo populista.

53 En esta perspectiva, luego del forcejeo inicial, es comprensible el pacto implícito entre el gobierno y la mayoría constituyente, estableciendo "líneas de comunicación" informales, a la vez que ésta acepta que no puede ocuparse del corto plazo y que debe reducir incluso sus mociones declarativas sobre estos temas para ocuparse sólo de "hacer la Constitución" en la esperanza de que, de aprobarse ésta antes del plazo, se adelante el calendario electoral, tal como lo ha declarado el gobierno.

Latina tiene en esta década de sangrientas dictaduras militares. Estas, sin embargo, siguen siendo opción vigente para el poder imperialista. Las interrogantes sobre la viabilidad del modelo Carter siguen abiertas y obviamente el campo de lucha trasciende las fronteras de nuestra realidad.